

**INTERPONE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN - PIDE
SUSPENSIÓN - PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD – RESERVA
CASO FEDERAL.-**

DIRECCIÓN ESCUELA
NRO D.E.
S/D
Para su elevación

....., DNI, en mi carácter de docente en el cargo de
....., TITULAR – INTERINO – SUPLENTE, con domicilio real o particular en la calle
constituyendo domicilio legal en la calle
....., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a LA DIRECCIÓN para su elevación digo:

I. OBJETO

Que en los términos del art. 46 y 51 del Estatuto Docente, vengo en legal tiempo y forma, a interponer recurso de reconsideración del acto administrativo que dispuso el cierre del GRADO/MÓDULO, a mi cargo, por carecer el mismo de fundamento, motivación y por falta de causa en los hechos, así como en el derecho, de la Disposición N° 15/DGEGE/2012 dictada por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal en fecha 29 de febrero de 2012, y de la Disposición N°47/DGEGE/2012, con causa legal en el Decreto 1990/97 B.O. N° 373 del 29/01/98, Artículo 2°, anexo 1, *-que fija el número mínimo de alumnos para permitir la continuidad del grado-* y Decreto 611/86 y modificaciones, cuya declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad, vengo a solicitar, así como de todos los actos que hayan sido dictados como su consecuencia.

En virtud de la grave afectación de mis derechos y garantías constitucionales, que dicha disposición nula de nulidad absoluta me provoca, solicito la suspensión provisoria de su ejecutoriedad, por los fundamentos que a continuación expreso:

II. FUNDAMENTOS.-

El GCBA ha dispuesto a través de la Disposición N° 15/DGEGE/2012 de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal en fecha 29 de febrero de 2012, y por la Disposición N°47/DGEGE/2012, suprimir el grado/módulo a mi cargo, que como docente poseo, dejándome sin grado y cargo docente, y lesionando mi derecho a continuar en posesión del mismo.-

Es por ello, que **impugno las Disposiciones señaladas**, ya que lesionan mis derechos laborales y constitucionales, y es por ello, que **tengo interés legítimo para hacerlo**.

El dictado del acto administrativo resulta ineficaz, porque debió ser realizado por un órgano competente para ello *-art. 7 inc. a) Ley 32-*. Sin embargo, fue **dictado por un funcionario incompetente y la incompetencia resulta en razón del grado**; toda vez que la misma modifica la POF (Planta Orgánico Funcional) del ciclo lectivo 2011 y es de competencia exclusiva, *-en tanto que no fue delegada a funcionarios de rango inferior-* del Sr. Ministro de Educación de la CABA, lo que va de suyo, no es óbice para el cumplimiento de las normas que enmarcan el dictado de los actos administrativos.-

Entre los motivos o motivación en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos, señala *-a los que me remito-* se destacan: *“el ejercicio pleno del derecho a la educación”*, que se lograría con *“grados o*

divisiones de alumnos integrados”, es decir incorporando mis alumnos a aulas de otros grupos de niños, en tanto que *“resultará más enriquecedor”*.

También lo motivaría, según su propio texto, el desdoblamiento de otros grupos de niños, y pareciera que los docentes cuyo cargo docente se ha vaciado, como es mi caso, se ubicarían en dichos cargos nuevos. Sin embargo, **dichos motivos son falsos y contradictorios**:

La disposición Nro. 47, cerrará 96 grados o aulas, en distintos niveles de educación de gestión pública, y solo serán creadas 2 secciones de primer grado (Escuela 13 DE19 y Escuela 19 DE 21) en toda la ciudad; que aún no se han efectivizado. Es decir que la creación de dos grados solamente, se encuentra por sí misma, muy debajo del crecimiento anual de la demanda, por aumento poblacional.

El ejercicio de la educación es menos pleno, más esforzado pedagógicamente y menos particularizado, cuanto mayor es el número de alumnos dentro de un aula, y es falaz que lo motiva la creación de nuevas aulas o secciones y cargos docentes, en tanto que resulta desproporcionada la supuesta compensación aludida. La única pretensión es dar idea de distribución de recursos humanos o económicos, lo que es falso, al tratarse lisa y llanamente de ajuste o racionalización en la educación pública, tras el abandono de que ha sido objeto.-

Que vengo a denunciar la mezquindad de recursos económicos con que ha venido siendo violentada la Escuela Pública durante los últimos años, sobre la que sistemáticamente se ha subejecutado el presupuesto anual que asignó la Legislatura, y desviándose sus fondos para otros fines ajenos, a la educación. Todo, de público conocimiento.

Asimismo, ello se ha correspondido con el incesante aumento en cantidad de escuelas, y cantidad de recursos económicos por establecimiento, otorgados a las escuelas con dueños particulares o privados.

Ahora, tras el dictado de la Disposición N°47, señala el Gobierno de la Ciudad, que: *“se planifica poniendo al alumno en el centro”*. A la vista, está su falsedad argumentativa. No se advierte la *“equidad educativa”* ni la *“movilidad demográfica”* supuestamente atendida, en tanto que ni este acto administrativo, ni los que lo precedieron, resultan equitativos con sus alumnos y docentes, y es evidente, que atento su ajuste no atiende el crecimiento de demográfico poblacional, desconociendo a qué se refiere la disposición con la expresión *“movilidad demográfica”*.

Que, señala la nueva Disposición N°47, por defecto en el dictado de la Disposición N°15, *“se ha ponderado la revisión pormenorizada de todas y cada una de las escuelas para la aplicación de la normativa vigente”*. En realidad, el único dato que se ha recabado, ha sido, el numérico. Es que solo, de números ha de tratarse, según entiende el juego dispositivo y de Decretos que se traen a la educación, con estos actos administrativos que impugno, por resultar extraños al ámbito educativo.

Los actos administrativos impugnados, no poseen ninguna consideración fáctica, científica y mucho menos pedagógica.

Es sabido que el cambio de educación individual a educación grupal, se ha realizado en base a cuestiones de corte económico y no pedagógico, ya que rinde más un maestro que trabaja con un grupo de alumnos que aquel que lo hace de a uno a la vez (*“La máquina de educar” de Pablo Pineau, Inés Dussel y Marcelo Caruso; Editorial Paidós; Buenos Aires, pág.33*), y si bien ello ha hecho posible a la educación como fenómeno colectivo, resulta contradictoria la motivación *“poniendo al alumno en el centro”* que se esgrime para cerrar grados y acumular sus alumnos afectados a grupos más numerosos, dejando a sus docentes al borde de la expulsión.-

Denuncio, que no se han llevado a cabo, las intervenciones de las familias, maestros, directores, ni profesionales psicopedagogos y/o psicólogos,

ni sus supervisiones, en las instituciones afectadas, para garantizar el servicio educativo a todos los niños y niñas afectados, por estas medidas.

Prueba de ello, es que no se han generado las interposiciones a través de actuaciones administrativas, tal como es habitual, ni se han habilitado espacios de intercambio necesarios.

La Ley 26.206 de Educación Nacional, que regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado constitucionalmente y por diversos tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen; en su artículo 4 establece la obligación por parte del Estado, de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.-

En virtud de la falta de motivación, la Disposición impugnada, no cumple con el requisito esencial de todo acto administrativo válido –art. 7 inc. e) Ley 32-

La disposición resulta extemporánea: se ha dado comienzo al ciclo lectivo año 2012. Las clases comenzaron el 28 de febrero, y **es irrazonable realizar semejante cambio estructural en esta circunstancia.-**

Siendo que los actos deben sustentarse en **los hechos y antecedentes que le sirvan de causa**, el dictado de esta Disposición es el resultado de una improvisación, y masividad impracticables sin afectar derechos laborales, y de niños y niñas a mi cargo.-

Es que jamás ningún miembro del Ministerio de Educación, concretamente del organismo Dirección General de Educación de Gestión Estatal, ni otro, requirió la información necesaria, para conocer la situación de alumnos/as, las particularidades del grado que se cierra, ni sus particulares condiciones de aprendizaje, ni económicas o sociales o bien; jamás se han requerido informes escritos a la escuela, para advertir el impacto que tal medida arrojaría en todas las personas afectadas, incluyéndome.

Denuncio, ahora entonces, que no se encuentran dadas las condiciones necesarias para cerrar el grado y derivar mis alumnos a otros grupos. Ofrezco desde ya, un informe pormenorizado de las condiciones que fundan mis expresiones al respecto, a agentes idóneos en materia pedagógica del Ministerio de Educación, según su incumbencia profesional, de modo de mantener en reserva los datos necesarios a tal fin de niños y niñas de mi grado.-

Solo zanjarán vínculos, se desarmará y se producirá la pérdida de redes establecidas en el grupo a mi cargo, se perderá el vínculo alumna/o docente, vulnerándose aspectos socio-emocionales logrados en años de trabajo y en la actualidad. Ello desvaloriza mi trabajo, lo reduce de manera violenta e irracional, y en ello me agravio también.

En definitiva, los actos que impugno, tienen motivaciones contradictorias y falaces, resultan infundados, no encuentran causa en los hechos o datos de la realidad, son extemporáneos, y de imposible cumplimiento; lesionan mis derechos laborales a la estabilidad en el cargo docente en la medida estatutaria, violentando dicha disposición impugnada, derechos y garantías constitucionales, y en todo ello me agravio.

A su vez, los actos administrativos impugnados, poseen causa jurídica - *art.7 inc. b) de la Ley 32-* en una norma inconstitucional, y en virtud de ello, se pide respecto del Decreto 1990/97 -*Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, N° 373 del 29/01/98, Artículo 2° que aprueba pautas para la redistribución de las Plantas Docentes Permanentes de todos los servicios en las distintas áreas educativas, descriptos en su Anexo 1-* la tacha de inconstitucionalidad y su inaplicabilidad en el caso que traigo para su reconsideración:

El Decreto 1990/97, violenta el derecho constitucional a la Estabilidad en el Empleo Público –*artículo 14 de la CN*-, en la medida del Estatuto del Docente -*Ordenanza 40.593*-, al suprimir mi cargo docente con fundamento en una tabla o tarifa fija, arbitraria e irrazonable, cuya validez eximiría al GCBA, de la obligación legal de fundamentar jurídicamente el acto administrativo que disponga el cierre de grados –*artículo 7 de la ley 32 CABA*- y de suprimir el cargo docente –*artículo 21, 22 y Cctes del Estatuto Docente CABA*-, con dicha desaparición.-

Es inconstitucional al afectar el derecho a mi trabajo en condiciones dignas y equitativas de labor –*artículo 14 bis de la CN*- en tanto que de manera infundada crean en mi caso, incertidumbre, inestabilidad, riesgo de cesantía con su correspondiente merma salarial, y los cargos docentes que me serán ofrecidos, me impondrán de seguro un mayor esfuerzo, si cuentan con mayor número de niños/as, lo que empeorará mi condición laboral. Sabido es que el control, la seguridad, la conducta de los niños demanda trabajo permanente durante las jornadas de trabajo, así como la enseñanza, sus actividades y por supuesto su evaluación, y la calidad del trabajo. No se puede desconocer que el grado de esfuerzo y la obtención de resultados en el aprendizaje, tiene relación directa con la composición de los grupos, y si bien las cualidades son muchas veces determinantes, para lograr las finalidades propuestas, la cantidad también influye de modo determinante.-

Reconocer validez jurídica a la Disposición cuestionada, importará la incompatibilidad con el Artículo 31 de supremacía de la Constitución Nacional, en tanto que la jerarquía jurídica del Decreto cuestionado, no puede alterar ni limitar el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, ni desvirtuarlo so pretexto de su mejoramiento, como lo hace la mencionada Disposición; así como con normas jerárquicamente superiores, como la Ley 26.206 de Educación Nacional, que regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen; y cuyo artículo 4 establece el de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.-

Podría sintetizarse en cierta medida la torpeza de las disposiciones, desde el punto de vista pedagógico con la siguiente afirmación: **El acto administrativo impugnado, tiene vicios de procedimientos**, en tanto que antes de su emisión debieron cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos para su dictado –*pedido de informe a la Escuela, opinión de la/el docente, psicopedagoga/o, dirección escolar etc*- y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico, también señalados, cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos, como los que vengo a reclamar.

Finalmente, y atento a que los vicios insanables traen aparejada la nulidad absoluta, no cabe la ‘ejecutoriedad’ inmediata del acto administrativo, - *artículo 12 de la Ley 32 CABA*-, y en virtud de ello, es que vengo a requerir que se suspenda su aplicación para este caso concreto.-

PETITORIO

Por todo ello, solicito:

- 1.- Me tenga por presentada/o, por parte y por constituido el domicilio legal.-
- 2.- Por pedida, la suspensión inmediata de las Disposiciones impugnadas.-
- 3.- Por interpuesto mi recurso de reconsideración, por fundado, y por hecha la reserva de Caso Federal.

4.- En subsidio, para el caso de rechazar el recurso de reconsideración, solicito se eleven los actuados para el tratamiento del recurso jerárquico interpuesto, previa intervención del la Procuración General de la C.A.B.A.-

5.- Por pedida la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Decreto 1990/97.-